

SUBEN de nuevo numerosos precios. Algunos, de objetos o servicios explotados o controlados directamente por el Gobierno; otros, por su autorización o negociación. Mientras, se desarrolla una campaña de organización e inspiración gubernamentales sobre el tema "precio estable", cuyo resultante final es hipócrita, cínico y ofensivo. Ha resultado contraproducente: se presta más a la ironía y a la indignación que a un cierto convencimiento.

La ira frente a los nuevos precios elevados, algunos en cantidades totalmente imprevistas, ¿contra quién se puede dirigir? Es muy difícil, cuando se dan explicaciones detalladas del fondo de la cuestión —como en el caso de los productos agrícolas, de la leche—, protestar contra las razones intrínsecas de las alzas o contra el origen en sí, contra los productores. Una parte de la indignación se dirige al "intermediario", figura desposeída de defensas tópicas, víctima frecuente de una derivación de culpabilidades, aunque realiza una función social determinada de distribución y sufre de los mismos problemas generales.

El vocabulario español tiene un amplio número de palabras para designar culpables: especuladores, agiotistas, logrosos... Nombres de fantasmas. Pocas veces se les aplica un nombre verdadero, un nombre de persona. Cuando no se dan explicaciones, como hace el Gobierno para sus propios precios —tabaco, ferrocarriles, gasolina para muy pronto—, por una mezcla de entre pudor y soberbia de poder, la indignación se dirige contra la falta de explicación, contra lo repentino, lo no advertido, lo no justificado. Es otra derivación de la realidad.

Las explicaciones filosófico-económicas de los movimientos de los precios, a partir del clásico "efecto de la disposición limitada del bien", a la tesis de Adam Smith del "sacrificio en trabajo", pasando por la más manida de la "ley de la oferta y la demanda", son de poca ayuda en el mundo de aquí y ahora. Nos referimos para explicarlos a cuestiones más sencillas: la pérdida de valor de la moneda nacional, añadida a la obligación de exportar; la necesidad de los productores de obtener una remuneración mayor para hacer frente a sus costes —lo cual no es más que otra forma de disfrazar la profundidad de la cuestión, puesto que



LOS PRECIOS Y EL PACTO

se establece un círculo vicioso—, la escasez de algunos productos, la crisis mundial y el desorden en la economía española. O la repercusión pública de la nueva fiscalidad. O, gran argumento eterno de los poderes, la incapacidad pública de someterse a la austeridad, a la reducción de lo superfluo: argumento que tiene la virtud de tipo bumerang de volver la acusación contra aquellos que la han lanzado. La realidad es que nadie duda hoy de que quienes elevan sus precios, sean productores directos —de la tierra— o sean grandes empresas multinacionales, o incluso agencias del Estado o empresas paraestatales, tiene razones para hacerlo.

Pero ¿qué queda, después de esto, de una política económica imaginada para hacer frente a la inflación, para mantener bajo control el índice general de precios, para que quede asegurada la austeridad colectiva? ¿Existe esa política económica más allá de las declaraciones, los informes, los libros blancos? Ha pasado un mes desde la caída del que iba a ser mago de las finanzas españolas, el profe-

sor Fuentes Quintana, y alguno de los colaboradores ministeriales que eligió, y hasta ahora no se han dado explicaciones públicas de lo que ha motivado esa defección (quizá las dé en el Congreso el presidente Suárez el miércoles 5, fecha que queda más allá del cierre de esta publicación). El señor Fuentes Quintana ha hecho públicamente ataques a la UCD gubernamental, ha realizado alguna declaración, pero tampoco ha ilustrado seriamente sobre los resultados de lo que quiso hacer y no pudo. El señor Abril Martorell, que le ha sustituido, no pasa de una retórica simple: las previsiones del pacto de la Moncloa se van cumpliendo, hay razonables esperanzas de mejora, no hay que propagar la idea del catastrofismo... Pero, dentro de ese moderado y vago optimismo, dice: "Estamos decididos al cumplimiento estricto de los pactos de la Moncloa, aunque quizá algunos puntos, en las actuales circunstancias, no sean cumplibles, como es, por ejemplo, el caso de los índices de precios de productos básicos. Pero en todo caso se ana-

lizarán y explicarán los motivos del posible incumplimiento". ¿Cuándo se van a analizar, cuándo se va a hacer esa explicación? ¿Hay motivos suficientes?

Porque si nadie discute que haya motivos para las alzas, lo que todos constatamos es que no están acordes con los salarios ni con las alzas de los salarios autorizadas por los pactos de la Moncloa, que en este caso procuran cumplirse con mucha mayor rigidez. Lo que los partidos políticos pactaron en la Moncloa, y lo que las centrales sindicales y los grupos empresariales aceptaron a regañadientes, pero con un considerable sentido cívico, fue que la inflación global quedase controlada de forma que los aumentos de precios y los de salarios fueran equivalentes: es decir, de un orden de un 22 por 100 aproximadamente. Aquello a lo que renunciaba la oposición pactante era a una mejora del nivel de vida, a un aumento del poder adquisitivo por parte de los asalariados.

Pero nunca pudo renunciar a que el equilibrio se mantuviese. Lo que está resultando, sean como sean las estadísticas que se pretendan hacer, es una disminución en el poder adquisitivo del asalariado, porque en muchos casos está, en nuestro país, por debajo del nivel de subsistencia. Y las medidas que se están tomando oficialmente, como los ocho mil millones de pesetas del presupuesto para tratar de enjugar en parte el paro obrero, o la elevación grotesca de un grotesco salario mínimo, no alivian la situación. Como no se alivia la situación del empresario.

La política antiinflacionaria del Gobierno ha sido parcial. No ha sabido implantar la austeridad de todos —empezando por él mismo—, no ha tenido credibilidad en ningún sector económico de la nación —ni entre los empresarios ni entre los trabajadores—; no ha liberado a las empresas de sus angustias ni ha mantenido el nivel de vida prometido. Se ha destrozado el ahorro, se están produciendo quiebras importantes, hay dudas a la hora de invertir —más que dudas— y hay angustia a la hora de repartir el nuevo presupuesto familiar. La responsabilidad del Gobierno está compartida con la de los partidos que firmaron los pactos de la Moncloa, con la buena fe de una posible mejora de la convivencia a todos los niveles: no son capaces, tampoco, de reaccionar ahora denunciando clara y abiertamente los pactos, y separándose de ellos. ■